

Debate

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira, Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga, Fredy Rivera, Jaime Borja Torres, Marco Romero.

DIRECTOR

Francisco Rhon Dávila
Director Ejecutivo CAAP

EDITOR

Juan Carlos Ribadeneira

ECUADOR DEBATE

Es una publicación periódica del Centro Andino de Acción Popular CAAP, que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$ 18

ECUADOR: S/. 5.200

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$ 6

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR S/. 1.800

ECUADOR DEBATE

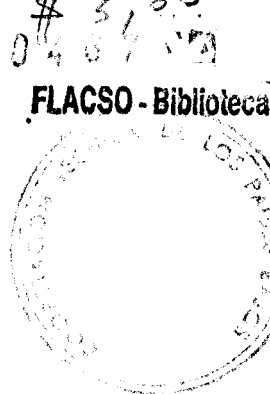
Apartado Aéreo 17-15-00173-B Quito Ecuador

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.



Centro Andino de
Acción Popular
CAAP
Director ejecutivo:
Francisco Rhon Dávila



ECUADOR DEBATE

Quito-Ecuador, Agosto de 1992

EDITORIAL 3 - 6

COYUNTURA

**La política económica del Gobierno de Borja y el
ajuste de cinturones 9 - 22**

ZONIA PALAN

Elecciones 92 o desreglamentación de la política 23 - 26

JOSE SANCHEZ PARGA

TEMA CENTRAL

La inflación: el gran argumento 29 - 36

DIEGO CORNEJO MENACHO

Los protagonistas de la inflación Latinoamericana 37 - 54

JAVIER IGUIÑEZ ECHEVERRIA

**Mercados al consumidor en Ecuador: los de-
terminantes de la inflación en el corto plazo**

(1980/1992) 55 - 69

SEBASTIAN INFANTE

La inflación: causas, consecuencias y remedios 71 - 80

PABLO LUCIO PAREDES

**Hacia una política no-ortodoxa de estabilización
para el Ecuador 81 - 115**

JURGEN SCHULDT

R224 Rw 9830 g:3

LIBROS 117 - 120

ANALISIS

El discurso del Quinto Centenario: en el umbral semiótico 123 - 142

DIEGO ALFONSO ACOSTA

**Deterioro de la vida en el neoliberalismo: el des-
concierto de la salud en América Latina 143 - 166**

JAIME BREILH

DEBATE AGRARIO

Los campesinos arroceros y el mercado andino 169 - 187

RAFAEL GUERRERO B.

**Campesinado y medio ambiente: elementos de
discusión 189 - 198**

FREDY RIVERA VELEZ

CRITICA BIBLIOGRAFICA

**Agricultura: Diagnóstico y perspectivas. Comen-
tarios al libro de Morris D. Whitaker 199 - 204**

MARCO ROMERO

BIBLIOTECA



HACIA UNA POLITICA NO-ORTODOXA DE ESTABILIZACION PARA EL ECUADOR

Jurgen Schuldt (*)

El ajuste neoliberal da lugar a dinámicas que impiden adoptar medidas coincidentes con una estrategia de mediano y largo alcance, menos aun, dasafiar aquellas requeridas para el "pago de la deuda social".

1. INTRODUCCION GENERAL

Durante los años ochenta, como consecuencia de la crisis de balanza de

pagos, las preocupaciones de los gobiernos ecuatorianos -al igual que en los demás países latinoamericanos- se concentraron en la problemática

* El autor es Coordinador del Area de Economía de FLACSO. La propuesta de estabilización económica que aquí se presenta fue elaborada para el proyecto CONADE-GTZ en el marco de la Estrategia "Ecuador Siglo XXI". Las opiniones aquí vertidas no comprometen a las instituciones mencionadas.

económica inmediata y se limitaron consecuentemente al diseño e implementación de políticas económicas de corto plazo. Tanto los desequilibrios externo y fiscal, como la inflación, monopolizaron la atención y los recursos de la Administración, materializándose tales esfuerzos en medidas de estabilización (anti-inflacionarias) y de ajuste (para equilibrar las cuentas pública y externa) que -a pesar de las promesas de éxito inmediato- se han ido arrastrando hasta el día de hoy, con mayor o menor fuerza, pero sin alcanzar los principales objetivos que persiguieran implacablemente; excepto quizás el del equilibrio, si bien precario, de la balanza de pagos.

Hoy en día, aún no hay señales que ese proceso se detenga; todo lo contrario: a juzgar por las expectativas de los agentes económicos y las primeras declaraciones de los próximos gobernantes, habrán nuevos y más profundos ajustes. Y, en la medida en que se siga insistiendo en el dogma que la inflación proviene de un "exceso de demanda", es muy probable que se continúe aplicando la receta conocida, practicada infructuosamente durante más de dos lustros.

Más aún, desde la década pasada se estima incongruente la aplicación de políticas sociales más amplias y la propuesta de medidas para el largo plazo, con los esfuerzos dirigidos a equilibrar la balanza de pagos y acabar con la inflación. El eje de la política radicó en alcanzar superávits crecientes en la Balanza en Cuenta

Corriente, a efectos de servir -siquiera parcialmente- la deuda externa y, sobre todo, para asegurar la remisión de utilidades de las subsidiarias de empresas transnacionales al exterior. Por este concepto de "pagos netos a factores del exterior" (que equivale a la diferencia entre el PIB y el PNB), en el transcurso de los años ochenta, el Ecuador sufragó -año a año- el 9% del PIB.

En pocas palabras, se instauró la idea-fuerza que las propuestas para el mediano y el largo plazos, así como las políticas sociales, debían esperar hasta que se haya logrado "estabilizar" la economía. Alcanzado esto podría pensarse en lo otro. La secuencialidad sería inevitable: primero cortar la inflación, después reactivar la economía y crecer y, más adelante, ocuparse de la problemática social (pobreza, distribución del Ingreso, etc.) y de los problemas estructurales o de fondo -cuya existencia aceptaban todos- de la economía ecuatoriana.

Esto es así porque el saber establecido sólo conoce una política de ajuste, calificada como el Consenso de Washington (Williamson, 1990), y porque ha logrado crear la imagen que no existe otra forma de reactivar la economía y enfrentar los problemas de largo plazo, si antes no se estabiliza ortodoxamente la economía. Este es, por tanto, un tema "resuelto", que ya no requeriría de discusión seria entre los buenos economistas.

Adoptada la política adecuada de estabilización, todos los demás problemas se resolverían a través del mercado: "La ortodoxia hace el supuesto fuerte sobre el largo plazo: una vez que la estabilidad es alcanzada, con relativa libertad de distorsiones de precios, las fuerzas del mercado traerán crecimiento. La restricción de divisas es aliviada por políticas de precios relativos correctas, y si el Estado se restringe a sí mismo a un papel limitado, entonces la inversión privada florecerá, apoyada por la respuesta de los ahorros a tasas de interés reales positivas" (Thorp, 1991: 200).

Lo que no se llegó a aquilatar en ese momento -ni siquiera actualmente- es que las propias políticas ortodoxas de estabilización y ajuste -aún cuando actuaran exitosamente en la dirección de sus propósitos más inmediatos, lo que tampoco se consiguió- podían crear a la vez cuellos de botella y problemas específicos que impidieran, a la postre, tanto la reactivación, como el desarrollo. Al margen de las irreversibles "cicatrices de la pobreza" (Rodríguez Rabanal, 1991) que dejan en la gran mayoría de la población y que repercuten en el desarrollo futuro del país.

En tal sentido, sin embargo, nadie se preguntó de qué serviría equilibrar la balanza de pagos y reducir la inflación, si ésto se hacía destruyendo paralelamente las bases para el crecimiento futuro: desmotivando los "espíritus animales" de los empresarios; reduciendo los

salarios a niveles tales que se destruía ese valioso "capital humano" redistribuyendo regresivamente el ingreso con la consiguiente desmotivación y reducción de la productividad; desestimulando el ahorro y destruyendo los canales que le permiten convertirse en inversión productiva; incentivando una economía de especulación; generando tendencias crecientes a lo delincencial, a lo subversivo; llevando a la desnutrición masiva entre los niños, recortando su potencial futuro; etc.

Es decir, al resolver -o intentar resolver- los problemas del corto plazo se estaban creando problemas -insospechados a primera vista- que irían a afectar las condiciones para el crecimiento en el mediano y el largo plazos.

A ello se añade el problema que la mayoría de economistas, aunque acepten la existencia del "costo social" del ajuste, estiman que no hay otra alternativa, que las políticas ortodoxas son inevitables, impostergables y, además, las únicas que pueden resolver los problemas, ante el fracaso de todas las demás alternativas que se pudieran imaginar o que fracasaron en la práctica.

En este contexto, el presente artículo se propone exponer una política viable de estabilización y reactivación para el Ecuador actual, alternativa a la ortodoxa-neoliberal; el que, en añadidura, permitiría la adopción de un nuevo esquema de acumulación. En ese entendido, sin embargo, aquí nos

ocuparemos exclusivamente de los aspectos de corto plazo, es decir, de las medidas de estabilización desde una perspectiva no-neoclásica, explicitando sus objetivos y bases teóricas.

Como se verá, esta propuesta empata adecuadamente con una perspectiva de mayor alcance, en el marco de una nueva Estrategia de Desarrollo para el Ecuador, en complejos procesos que se refuerzan mutuamente, sin que se trate de una receta ingenua en la que habría "lonche gratis". El programa tendría, en ese aspecto, una duración aproximada de doce meses; tiempo que debería aprovecharse para iniciar -en un entorno de baja inflación y reactivación económica- las reformas que permitirán sentar las bases para un crecimiento sostenido, con una redistribución más equitativa del Ingreso y la riqueza, en el entorno de una macroeconomía sin inflación ni desequilibrios de balanza de pagos.

2. HACIA UN PROGRAMA ALTERNODE ESTABILIZACIÓN Y AJUSTE

Nos preguntamos si habrá alguna fórmula realista de política que permita compatibilizar la estabilización de precios con la reactivación productiva de la economía ecuatoriana, sin derivar en desequilibrios insostenibles de balanza de pagos. Más aún, ¿será posible que esta política de corto plazo empate con una propuesta alternativa de desarrollo de

largo plazo? De existir tal esquema, y así lo creemos, ¿cuáles serían los requisitos para llevarla a cabo exitosamente? ¿Están dadas hoy en día las condiciones para ello? Finalmente, ¿cuál deberá ser la secuencia en que debe adoptarse y qué grado de flexibilidad debe incorporarse para hacerlo eficazmente?

La receta que plantearemos ciertamente no es una fórmula mágica que permitirá resolver todos los problemas, ni mucho menos se trata de una que no requiera esfuerzo alguno o que se pueda lograr de la noche a la mañana; pero tampoco es un conjunto sesgado de medidas como el de la ortodoxia, pero seguramente es más eficaz que ella y no conlleva sus enormes "costos sociales", como veremos a continuación.

2.1 Lineamientos Generales y Lógica del Programa

La esencia del programa radica en, a la vez, alinear los precios relativos básicos de la economía y acabar con el componente inercial de la inflación. Esta última ha sido reconocida recientemente como elemento propagador esencial del proceso inflacionario (Infante, 1992; Paredes, 1991).

Se trata de un enfoque gradualista alternativo que, a diferencia de los programas heterodoxos de choque (Lopes, 1986), no propugna una congelación de precios -ni generalizada, ni parcial- a lo largo de la fase de estabilización.

En cuanto al primer aspecto, evidentemente los precios básicos de la economía se encuentran fuertemente distorsionados, unos adelantados y otros atrasados. De ahí que la propuesta esté dirigida a manipular centralizadamente los precios relativos para recuperar el retraso de unos y para retrasar los otros.

En cuanto a lo segundo, se trata de una política que coordinará los distintos precios de la economía hacia la baja a partir de determinadas "anclas", con lo que también se enfrentarán las expectativas inflacionarias.

La propuesta privilegia el criterio de conseguir mantener fijos los costos medios variables de las empresas y por tanto también los márgenes unitarios de ganancia. De esta manera, como veremos, se reduciría apreciablemente la tasa de inflación que hoy en día -y ya desde hace más de dos años- se encuentra en el 50%, sin dar señales de reducción alguna. Los mecanismos que se utilizarían, movilizarían los mercados de tal manera que se lograría también una sustantiva reactivación del aparato productivo, sin que se continúe deteriorando la distribución del ingreso en el país.

Aunque en unas versiones de esta

propuesta general, como hemos dicho, se haya intentado la congelación de precios con algunos éxitos iniciales, en el caso del Ecuador hay varios argumentos que no recomiendan su ejercicio en las actuales circunstancias. El principal de los cuales radica en el hecho que la capacidad del Estado es insuficiente para hacerlo adecuadamente, sin generar paralelamente efectos colaterales mayores que pueden resultar peores que la enfermedad. Aunque es cierto que podría contarse con la población para ejercer ese control en forma más estricta, es insuficiente esta vía en un país en el que no se tiene experiencia en este tipo de procesos de fiscalización pública.

Los reajustes de costos -hacia arriba o hacia abajo- los hemos simulado en base a una ecuación sencilla de precios, cuyos resultados -más que el procedimiento preciso, sujeto aún a leves ajustes- daremos a continuación (ver Acosta y Schuldt, 1992). La idea central es concebir una fórmula de precios en la que se asume que los empresarios le añaden un margen de ganancia "normal" a los costos medios variables (a todo lo que se le aumentan los impuestos indirectos a la producción).

Esos costos medios estarían constituidos -ponderados adecuadamente- por las remuneraciones, los insumos importados,

¹ Como es convencional, también, en materia de política económica, específicamente en el campo arancelario, en el de la determinación del tipo de cambio y de las tasas de interés, etc. No se actuaría, en cambio, sobre los precios de bienes, servicios e insumos en general, sean éstos "flexibles" o "administrados".

los bienes intermedios nacionales y los precios públicos (tarifas de energía, agua, etc.), a los que se le añaden los gastos financieros (básicamente por concepto de capital de trabajo); en cada caso, por unidad de producto. Evidentemente la productividad de los factores -sobre todo del trabajo-, cuando aumenta, influye en sentido inverso sobre la dinámica de los precios (también la extensión de la jornada de trabajo podría actuar en esa dirección).

De ahí que los precios básicos a considerar -y que pueden ser influidos, directa o indirectamente, por el gobierno- serían: los salarios; el tipo de cambio y los aranceles (así como las barreras para arancelarias); las tarifas públicas y los precios públicos; las tasas de los impuestos indirectos; y la tasa activa de interés. Para tal esquema son exógenos los precios de los insumos, tanto nacionales, como importados.

En este análisis estamos pensando, por tanto, básicamente en los precios "administrados" del sector moderno-urbano, más que en los precios "flexibles" de los sectores agropecuario y de servicios, que no tiene sentido que se fijen a través de mecanismos administrativos (para la distinción sobre esta "formación dual de precios", véase, entre otros: Kalecki, 1953; Nordhaus, 1976; y Okun, 1981).

Los datos de aumento o disminución de los costos y precios relativos que presentaremos no son precisos. Pero sí

sirven para mostrar las tendencias globales y para facilitar la comprensión de la lógica del programa. Ciertamente que para adoptar los valores correctos es necesario establecer y evaluar una ecuación de costos para una "empresa-tipo" o representativa del segmento "moderno" de la economía en la que se "administran" los precios.

En pocas palabras, nuestra propuesta inmediata consiste básicamente en la modificación de los precios y costos relativos, lo que contribuirá a una desinflación gradual pero significativa. Esto tiene por objeto, al tiempo que se ajustan los -actualmente distorsionados- precios relativos, reducir las expectativas y la inercia inflacionarias. Este procedimiento llevaría del actual círculo vicioso (estabilización-inflación-recesión-desempleo-especulación) a uno virtuoso, en el que se reactivaría la economía (actualmente con elevadas capacidades ociosas de producción), se mejoraría la distribución del Ingreso nacional, se asignarían más adecuadamente los recursos, se evitaría la fuga de capitales (y la creciente dolarización) y se estimularía la acumulación productiva (recortando la dinámica especulativa que hoy rige la sociedad), como veremos más adelante.

De esta manera se sentarían, paralelamente, las bases y prerequisites para dinamizar y reestructurar el proceso de acumulación en el mediano y el largo plazos; tema que sería materia de otro trabajo.

Los principios que se postulan aquí fueron originalmente concebidos por Cortázar, Foxley y Tokman (1984: Cap. III; especialmente, las secciones E. y F.), pero -que sepamos- no han sido debatidos y desarrollados por otros autores, ni han sido aplicados apropiadamente en ningún país.

Su propuesta la denominan "enfoque alternativo de estabilización post-monetarista", porque la pensaron para economías que habían estado sujetas a programas neoliberales de ajuste, en que se "enfrenta simultáneamente la necesidad de acciones de política que corrijan el atraso cambiario, que recuperen niveles aceptables para los gastos sociales y que reactiven la economía para reducir el desempleo. La política debe además enfrentar la necesidad de renegociación de la deuda externa e interna, y en particular la reconstrucción de buena parte del sector industrial destruido" (p. 89). Se observa, por tanto, que se refieren a las economías del Cono Sur a principios de los años ochenta, en que tales políticas monetaristas se aplicaron en forma radical.

Si bien el caso ecuatoriano es menos drástico en sus consecuencias (hasta ahora), veremos que los principios esbozados se pueden aplicar con algunas adaptaciones (su viabilidad será aún mayor cuando fracase el programa ortodoxo radical que aplicaría en el país el próximo gobierno).

De lo que se trata, según los autores, es que, "a diferencia de enfoques anteriores, la corrección de atrasos en algunos precios puede compensarse en su impacto inflacionario, al menos parcialmente, mediante la reducción de un precio que se encuentra obviamente por sobre su nivel de equilibrio, cual es la tasa de interés real" (ibid.). En efecto, en la simulación de política que ellos realizan bajan la tasa de interés nominal a la mitad y aumentan los salarios nominales y el tipo de cambio a sus niveles de "equilibrio", lo que les permite -por algo más de un año- reducir sustancialmente la tasa de inflación.

Dado que su modelo sólo incluye esas tres variables instrumentales (precios del crédito, de la divisa y de la fuerza de trabajo) resulta algo restringido para fines de aplicación práctica; de ahí que hayamos incluido varias más, que nos otorgarán una mayor libertad y variedad de acción, respetando sin embargo la metodología básica diseñada por sus mentores.

Los autores advierten, sin embargo, lo que tenemos que tener muy presente en el caso ecuatoriano, que "el mecanismo descrito no puede constituir un sustituto permanente de una necesaria política de ingresos y de una política económica que enfatiza el crecimiento del producto y de la productividad como las únicas bases permanentes de una economía estable. Sin embargo, el ejercicio tiene la virtud de mostrar la posibilidad de lograr avances durante algún tiempo.

Mientras se implementan institucionalmente las otras y más fundamentales políticas, parece posible operar en forma simultánea en la corrección de los atrasos de algunos precios (salarios, tipo de cambio), apoyándose para ello en la reducción de los excesivos niveles alcanzados por la tasa de interés real durante los experimentos monetaristas" (ibid., p. 98).

2.2 Manipulación de los precios básicos

En todo proceso inflacionario algunos precios suben más allá del índice medio, otros lo hacen por debajo de él; tendencia que, además, no es sistemática, pudiéndose revertir la marcha de los precios relativos (Alberro, 1987, Lopes 1986) ha llamado "subajustadores" a los segundos y "sobreajustadores" a los primeros. Si se comprende que la inflación es fundamentalmente un conflicto entre fracciones sociales por la repartición del Ingreso Nacional -en que cada una pretende incrementar o conservar su tajada- ésto resulta evidente (Rowthorn, 1977). Lo que tiene mayor vigencia aún en periodos en los que la producción está estancada o decrece, ya que todos quieren mantener siquiera su participación tradicional. En ese proceso la inflación cumple el papel de ajustar las expectativas y pretensiones (nominales) de los grupos a las

posibilidades reales de la economía. Sin embargo, algunos sectores tienen un mayor poder para imponer sus alzas que otros, con lo que se modifica -a través de los cambios en precios relativos- la distribución de lo producido a nivel agregado.

Ese proceso puede seguir por algún tiempo, incluso hasta por un máximo de un lustro en el mejor de los casos. Pero llega un momento en que -si no se adoptan los ajustes correspondientes- explotan los desequilibrios macroeconómicos que ese proceder conflictivo conlleva. Llegado ese momento, cuando los desajustes acaban con la estabilidad relativa, se tienen que aplicar políticas de ajuste para "alinearse" los precios relativos básicos; lo que generalmente se da en base a un programa de apoyo contingente con el FMI.

Para los efectos de la propuesta de política que sigue, adoptaremos valores que cuajen con la realidad ecuatoriana; si bien su precisión no es muy grande por el momento y deberán hacerse aún algunas revisiones para llegar a cifras más adecuadas. Esto es aún más pertinente en el momento actual, recordando que en procesos previos a un cambio de gobierno se observan tendencias desequilibrantes y transformaciones abruptas de ciertas variables claves, sobre todo de ciertos precios "sensibles" como el tipo de cambio y las tasas de interés.

2.2.1. "Sobreajustadores"

Veamos, en primer lugar, para el caso ecuatoriano, los precios básicos "adelantados", es decir, los que se habrían ubicado en un nivel muy elevado en términos de una senda de equilibrio de largo plazo de la economía (beneficiando excesivamente, en términos absolutos y relativos del Ingreso, a quienes gozan de ese adelanto).

A nuestro entender, hoy en día se trata básicamente de tres precios o tasas adelantadas: las tasas activas de interés, que bordean el 62%, con lo que en términos reales se encuentran en torno al 8% (considerando una inflación del 50%); las tasas de impuestos indirectos, que llevan a un nivel equivalente al 15,4% del PIB (con datos de 1990); y, finalmente, los márgenes unitarios de ganancia en el segmento urbano-moderno (industria manufacturera, comercio y servicios, básicamente), donde -como respuesta automática al proceso recesivo- se buscó cubrir los costos fijos y mantener la tasa de ganancia a través del alza de aquellos (Consúltese, a este respecto, el trabajo de Schuldt, 1992; Anexo B.4.).

En la implementación de la propuesta debe actuarse, por tanto, en esos tres ámbitos, tendiéndose a reducir ese adelanto relativo; problemática central que tratamos a continuación.

La tasa nominal de interés debe reducirse de tal manera que, en lo posible, no sobrepase el 2% en términos reales, considerando una inflación esperada anual del 15% (que es el nivel que resultaría de las medidas que se adoptarán, así como considerando sus efectos conexos). Lo que exigiría reducirla del 62% al 17,3%. Esto evidentemente no puede suceder gradualmente, sino en un determinado día, en que el gobierno anunciaría el "paquete" completo de medidas, que detallaremos en seguida.

Evidentemente, en el campo financiero, ello obliga a una reconcertación de las deudas, a efectos de evitar una drástica redistribución de la riqueza (en este caso, activos financieros) entre deudores y acreedores. En esa circunstancia, la mayoría de los prestatarios no estaría en condiciones de cumplir sus compromisos si continuase rigiendo la tasa nominal de interés en presencia de una inflación del quince por ciento (¡implicaría una tasa real de interés del 40,9%!). En cambio, los prestamistas obtendrían ganancias extraordinarias ("windfall profits") de seguir rigiendo los contratos originalmente estipulados a la tasa de interés vigente antes de su reducción.

Es éste uno de los problemas más complejos a enfrentar en el programa, pero que ha sido fácilmente resuelto en otras experiencias de reducción drástica en la tasa de inflación, en presencia de contratos de préstamo previos concertados originalmente a tasas de

interés muy elevadas (correspondientes a las sustanciales tasas de inflación vigentes antes de la aplicación del programa). Véase al respecto el trabajo de Modiano (1987) en el que se detallan los procedimientos para evitar la redistribución masiva de activos a que aludíáramos.

De cualquier forma, esa reducción de la tasa de interés nominal -aunque inicialmente no sea creíble la tasa de inflación esperada o programada del 15%- llevaría a una rápida reactivación -ceteris paribus- de las ventas y asimismo de la producción (aunque esta última, en los primeros meses del programa, no se observe porque los empresarios se desharian de sus inventarios), tanto por el lado del **consumo** (mayores ventas a plazos de bienes duraderos), como por el de la **inversión** (al reactivar la construcción en primera instancia; posteriormente vendría también la adquisición de maquinaria y equipo; y con ésta el impulso de todos los demás sectores).

Una segunda medida importante tendrá que darse por el lado de los impuestos. La presión tributaria en el país se ha mantenido sorprendentemente constante y relativamente elevada en el transcurso de los últimos quince años, al ubicarse en torno al 18% del PIB (según las cifras de las Cuentas Nacionales del BCE; No. 14). Lo interesante, en cambio, es observar la radical modificación en la estructura de la recaudación tributaria.

Mientras entre 1974 y 1985 la relación entre impuestos indirectos y directos se sostuvo en 1,5, ésta ha ido creciendo hasta más que duplicarse a un promedio de 3,6 entre 1987-90. En valores reales tenemos que los impuestos directos significaban 14,4 miles de millones en 1984 para declinar -en un proceso drástico que se da principalmente a partir de 1986- a 8 mil millones en 1990 (es decir, un descenso del 44%). En cambio, los impuestos indirectos aumentaron de 15 mil millones a algo más de 28 mil millones en ese lapso (1984-1990), lo que en términos porcentuales equivale a un significativo aumento del 89%. Claramente se presenta aquí un desequilibrio que tiene repercusiones indeseables sobre la macroeconomía. Políticamente se entiende que los gobiernos tiendan automáticamente a ese tipo de reestructuración tributaria en vista del poder relativo mayor del empresariado y las clases adineradas que se niegan a aceptar incrementos en los impuestos directos y que trasladan las alzas de los impuestos indirectos -en la determinación de sus precios administrados- sobre el resto de la sociedad.

Nos interesa hacer esta distinción entre impuestos indirectos y directos puesto que el impacto macroeconómico de su modificación es muy distinto en sus repercusiones. Aunque en la práctica ésto no es tan tajante, se puede afirmar que, mientras los impuestos indirectos se cargan inmediatamente sobre los

precios por parte de las empresas (se entiende que, principalmente, por las ubicadas en el segmento moderno-urbano-oligopólico), los cambios en los impuestos directos no ejercen un efecto inmediato sobre la economía (si bien, a la larga, probablemente actúen negativamente sobre la inversión), en especial, no tienen un impacto sobre los precios (Bacha, 1982; Taylor, 1986).

De ahí que la propuesta vaya dirigida, por un lado, a disminuir las tasas del impuesto indirecto y, por el otro, a aumentar los impuestos directos. En cuanto a estos últimos, quizás, más que pensar en elevaciones de tasas habría que actuar sobre la base, mejorando la recaudación (de tal manera que recuperen el 7,5% del PIB que alcanzaron entre 1979 y 1983, respecto al bajo nivel de 4,4% que cubren actualmente, según las estadísticas para 1990). Como en todas las experiencias de recesión productiva, también aquí la evasión tributaria ha aumentado apreciablemente (CEPLAES, 1992: 66). De cualquier forma, lo que se busca es bajar levemente los impuestos indirectos para actuar sobre la inflación y, quizás no desde el inicio, subir los directos (sea por tasa y preferiblemente por base) para asegurarse una buena y consistente recaudación tributaria.

De ahí que, insistir en mayores incrementos de los impuestos indirectos es contraproducente, ya que significa estimular la inflación, en la medida en que las empresas del sector moderno-

urbano-oligopólico trasladan los aumentos directamente a los precios. De otra parte, aplicar nuevas alzas en los directos -sobre todo al comienzo del programa- no contribuiría a generar las expectativas favorables que se buscarían instaurar desde un inicio.

Como veremos más adelante, esta propuesta llevaría a una reactivación productiva relativamente automática, sería de esperarse aumentos reales en la recaudación -tanto de los directos, como de los indirectos- por ese mismo efecto. De otra parte, en la medida en que el efecto Olivera-Tanzi (que mide el impacto reductor que ejerce la inflación sobre la recaudación tributaria) sería mucho menor, también por ese lado el gobierno aumentaría su recaudación. Sin embargo, en parte esto estaría compensado por la reducción del "impuesto inflacionario" (que es el resultado de la tasa de inflación multiplicada por la tenencia de dinero -en efectivo o en cuentas corrientes- por parte del público).

También el fortalecimiento de las cuentas fiscales permitiría el otorgamiento de mejores remuneraciones al personal de la administración tributaria y, en general, del sector público. Si, además, se pudiera restablecer la credibilidad en la asignación de gastos por parte del gobierno, a fin de estimular la propensión a tributar por parte del público (entre otras medidas, por la transparencia en los proyectos, las licitaciones públicas, las campañas

de moralización, etc.), ello permitiría darle un gran empuje al programa.

En cuanto al elevado margen de ganancia de las empresas del sector moderno-urbano-oligopólico, no parece adecuado actuar sobre él directa o indirectamente (excepto en casos aislados, cuando se observe un "sobreajuste"). Pensamos, incluso, que ese margen bajaría paulatina y automáticamente con la reactivación y la caída de la inflación, tanto porque el proceso le permitiría a los empresarios cubrir más fácilmente los costos fijos unitarios (que son decrecientes), como porque la masa de ganancias aumentaría.

2.2.2. "Subajustadores"

Por otra parte, veamos a continuación lo que habrá de hacerse con los precios básicos que se encuentran rezagados. En orden decreciente de atraso debe tomarse en cuenta los siguientes: remuneraciones, precios públicos y tipo de cambio. Aunque también los alquileres han sufrido un retraso apreciable, no es conveniente que intervenga en su determinación el gobierno, tratándose de precios "flexibles"; creemos que con la reactivación se irían ajustando naturalmente a su nivel de equilibrio de largo plazo.

En primer lugar, es evidente el retraso espectacular de las remuneraciones,

acaecido a lo largo de toda la década pasada; el mismo empresariado -según declaraciones públicas de sus principales gremios- estaría dispuesto a incrementar sustancialmente los salarios si cambiarían las condiciones macroeconómicas, tanto porque ello llevaría a incrementar la productividad (no sólo por la disminución de las huelgas), como porque ello estimularía las ventas por la mayor demanda efectiva.

A este respecto, debe tenerse presente que la masa de remuneraciones -en sucres de 1975- ha declinado en más del 35% a lo largo de los años ochenta; lo que nos da una idea de la compresión del mercado interno. Correspondientemente, la participación de las remuneraciones en el PIB ha declinado del 30,2% en 1981 a sólo 12,7% en 1990; evidentemente favoreciendo a los trabajadores independientes o por cuenta propia y, sobre todo, a los perceptores de ganancias, rentas e intereses.

Sobre la base de una ecuación sencilla de precios, en nuestras simulaciones -para que la inflación anual decline al 15%- hemos llegado a determinar que las remuneraciones pueden incrementarse -al margen del aumento otorgado en junio de este año- en hasta un 30% (quedando congeladas luego por todo un año; sin considerar los aumentos que puedan conseguirse por negociación colectiva), lo que equivale a un sustantivo aumento real del 13%, en el mejor de los casos.

En segundo lugar, también es evidente que se han retrasado los precios públicos, sobre todo los de la gasolina, la electricidad y el agua. El ajuste debe llegar al 20% en el Día D. Con ello, a lo largo del primer año, se lograría incrementar el precio real en algo más del 10%.

Un punto central, en tercer lugar, tiene que ver con el tipo de cambio. Aunque se venía devaluando algo más allá de la inflación en estos meses previos al recambio de gobierno, es probable que no alcance la paridad hasta el 10 de agosto (la restrictiva política monetaria del gobierno y el efecto de la pérdida de RMI generó una iliquidez que impidió el alza del tipo de cambio). Ello exigirá un leve ajuste, de quizás un 10-15% (con lo que, en términos reales, ganaría paridad a lo largo del primer año del programa).

2.2.3. Credibilidad y Vigilancia de precios

Todas estas medidas se adoptarían de golpe, el propio día en el que se anuncia el programa ("Día D"); momento en el cual también se anunciaría la posterior estabilización de los precios y tasas básicas -sobre las que tiene control el gobierno- durante la vigencia del programa (probablemente un año).

Como es evidente este Programa debe mantenerse en secreto hasta el Día D en que se anunciaría y aplicaría

inmediatamente el "paquete" completo de medidas (probablemente deban declararse uno o dos días de "feriado bancario"). El conocimiento previo de las medidas, como es obvio, llevaría a los agentes económicos a actuar en un sentido que iría en contra de los activos con que cuenta el programa. Más adelante, así debe informarse, el programa se ajustaría y diseñaría sobre la base de intensas concertaciones -generales, regionales y sectoriales- con los sindicatos, gremios empresariales, campesinos, trabajadores independientes.

Paralelamente en unos aspectos y posteriormente en otros, se iniciaría el ataque a las causas más profundas de la inflación, que en la fase inicial sólo se enfrentarían superficialmente.

Está a la mano, que todo el programa podría ser aprovechado por los "sobreajustadores" (pensamos, sobre todo, en los empresarios de la industria manufacturera "moderna") para elevar su margen de ganancia, en vista de las expectativas negativas de inflación que pudieran tener. En tal sentido, incorporarían a su margen de ganancia (en vez de considerar la reducción de costos que ello significa) la rebaja de impuestos indirectos y de las tasas de interés, pero recargarían sobre el precio las alzas en los demás componentes de costo. Con lo que, en vez de reducir la inflación, la azuzarían aún más. Esto podría suceder efectivamente si la recuperación económica no se proce-

sará al cabo del primer trimestre de adopción del programa.

De ahí la importancia del liderazgo y credibilidad que debe ejercer el gobierno desde el primer día de su aplicación. A partir del "Día D" de aplicación del Programa debería explicarse amplia y didácticamente la lógica de la "manipulación de costos relativos" a través de los medios de comunicación; lo mismo debería darse en reuniones con los gremios empresariales, los sindicatos y los campesinos.

Pero ello debería estar acompañado por una estricta vigilancia de la evolución de precios (poniendo énfasis en los al por mayor) por parte del gobierno; acompañado incluso por estudios minuciosos de costos y precios de las diversas ramas productivas, desde el Ministerio de Finanzas y en colaboración con Facultades de Economía de las Universidades y Centros de Investigación. También podría resultar conveniente organizar a los Consumidores en instituciones y gremios específicos, a los que se podría convocar para conocer sus demandas y para que contribuyan en la fiscalización de los precios básicos.

A medida que progresa el programa y los diversos agentes económicos entiendan su lógica y observen sus éxitos, el gobierno debe pasar a concertar metas específicas con ellos (semestrales o anuales). A este respecto no bastaría fijar procedimientos en

torno a precios y salarios, sino así mismo en relación a las tasas de interés, precios públicos y tipo de cambio. Más aún, metas precisas de producción -en las áreas de bienes de consumo de masas- sería un requerimiento deseable en un determinado momento del Programa. Finalmente, también será indispensable que el gobierno se comprometa en la supervisión, tanto de los canales de comercialización, como de la intermediación financiera, que aunque en importante medida reflejan la dinámica macroeconómica, en muchos casos poseen márgenes de ganancia excesivamente elevados por el poder monopólico o monopsónico que están en condiciones de ejercer.

2.3. Impactos colaterales y tasa de inflación

Como se ha podido observar, la lógica central del programa radica en alcanzar aumentos reales del salario, del tipo de cambio y de los precios públicos, sin menguar necesariamente el margen de ganancia de las empresas. Esto se logrará reduciendo la tasa de impuestos indirectos y la tasa nominal de interés, sin que eso signifique, respectivamente, mayores niveles de déficit fiscal o el retorno a tasas de interés reales negativas.

Un programa de este tipo, si es adecuadamente implementado, beneficia a todas las fracciones sociales. Probablemente únicamente el sector financiero se opondrá a un esquema de

este tipo, porque se perjudicaría aparentemente en un inicio (Camard, 1991). A la larga, sin embargo, por la dinamización de la actividad productiva, todos resultan beneficiados (en contraste con el juego de suma cero que rige la economía en el momento actual y, cuando menos, desde hace un lustro).

Se observa inmediatamente que el Programa delineado contribuiría a resolver problemas que están vigentes ahora y que dan lugar a un círculo vicioso de inflación con estancamiento.

En primer lugar, sabemos que hoy en día no hay crédito o que éste es excesivamente oneroso, creándose los problemas consiguientes (recorte de la inversión y la producción, especulación, carteras pesadas, etc.). La baja de la inflación a través de la reducción de las tasas de interés podrá contribuir a enfrentar esta dificultad con relativa rapidez (en dos o tres meses), restableciendo la confianza en el sistema económico.

De otra parte, ligado a lo anterior, el Programa acabaría con la especulación financiera y con su tendencial predominio—desde principios de la década pasada—sobre las actividades propiamente productivas, en la medida en que las rentabilidades relativas cambiarían drásticamente.

La alta capacidad ociosa de producción existente actualmente se comprimiría

rápidamente, una vez que el empresario observe los primeros resultados positivos de la caída en la tasa de inflación. Hoy en día la producción languidece y no hay empleo productivo de ingresos satisfactorios (el desempleo en el país se encuentra en torno al 13-15% y el subempleo rebasa largamente el 50%); con lo que también la productividad del trabajo ha declinado sustancialmente.

Varios de estos "problemas" son, por su parte, "activos", es decir elementos que sirven de sustento a esta política alternativa, como veremos más adelante (ver sección 3.2.).

Téngase presente, sin embargo, que este programa no reducirá la inflación sino gradualmente, en tanto las fuerzas inerciales aún actuarán por unos meses y porque la producción también tardará en alentarse. De lo que se desprende que, de ninguna manera, se debe anunciar como meta del programa la inflación cero. Esto se hizo ingenuamente en alguna experiencia heterodoxa latinoamericana de choque (es decir, las acompañadas por congelamientos generales de precios) a mediados de la década pasada. En el diseño de estos programas sólo se consideró el "sector moderno-administrado" de la economía (donde efectivamente la inflación cayó a niveles irrisorios porque ahí el congelamiento era implementable y que sus costos medios variables no se habían modificado), no así el de los

segmentos de precios flexibles (que se rigen por la oferta y la demanda, con lo que suben en presencia de reactivaciones económicas drásticas y por los cambios estacionales).

Dado que el poder de compra de las remuneraciones aumentaría, se elevarían también los precios de los - difícilmente controlables por la burocracia- bienes flexibles (agricultura, pesca, servicios), que son los que se producen básicamente en los segmentos más marginados de la sociedad, con lo que habría una redistribución relativamente radical de los ingresos hacia los barrios marginales urbanos y las comunidades campesinas.

Se observaría así, en el proceso, una nítida recuperación de los precios flexibles respecto a los administrados, que es algo que en efecto se buscaría, en un sentido progresivamente redistributivo. Nótese que ello equivale a una mejora de los términos de intercambio agropecuarios/industriales y, por tanto, a una redistribución del ingreso de la ciudad al campo, así como de los segmentos modernos de la economía a los "tradicionales". La reactivación del segmento moderno de la economía y la forma en que se manipularían los precios relativos lleva necesariamente a ello.

Esencial en esta propuesta es que la modificación de los precios relativos evite azuzar aún más el conflicto distributivo. Vemos que no lo hace, en el

sentido que el margen de ganancia se mantiene constante (aumentando incluso la masa de ganancias), que los salarios reales aumentan, que el gasto público puede aumentar (financiado por la incrementada recaudación real) y, sobre todo, que los ingresos de los "informales" y los campesinos aumentan.

Reforzaría todo lo anterior el hecho que la economía estará creciendo a tasas relativamente elevadas, por efecto de fuerzas endógenas que las impulsarán en ese sentido, tal como se mostrará en la sección siguiente.

3. LOS ACTIVOS DISPONIBLES Y LAS FUERZAS PROPULSORAS DE LA REACTIVACION

¿Cuáles son las fuerzas exógenas y endógenas que impulsarán la reactivación productiva a partir del ajuste de los costos relativos? ¿Qué pre-requisitos son necesarios para aplicar esta política? ¿Cuáles son las trampas que puede crear el Programa y llevarlo al fracaso? Intentaremos aproximarnos a la respuesta de estas cuestiones en lo que sigue.

3.1. Determinantes de la reactivación productiva

La misma concepción del programa y su secuencia alienta fuerzas imanes que darán lugar a una reactivación de la economía a partir de una

expansión de la demanda efectiva. A la larga, también actuarán en esa dirección fuerzas que actúan por el lado de la oferta, tales como el aumento en la productividad del trabajo, el mayor aprovechamiento de las economías de escala, las crecientes economías externas de la producción, la renovación del equipo y maquinaria instalados, etc.

Los programas ortodoxos de estabilización están ligados, casi por definición, a recesiones relativamente prolongadas y profundas del aparato productivo. De ahí que surja la interrogante sobre las fuerzas que actuarían en sentido contrario en la propuesta que aquí se pone en consideración del lector.

A este respecto, permítasenos enumerar sintéticamente los efectos que tenderán a reactivar endógenamente la economía en el transcurso de la aplicación de los programas arriba expuestos.

Los elementos centrales que contribuirán al crecimiento (o lo obstaculizarán), a pesar de la estabilización de precios, y que derivan en importante medida de la especificidad, tanto de las medidas a adoptarse, como de su secuencia. En esta exposición seguiremos muy de cerca algunas de las hipótesis planteadas por Taylor (1987), en las que ausculta la retroalimentación de la demanda efectiva en relación a los cambios en la tasa de inflación.

En primer lugar, lo que se denomina "efecto Tobin", que es el proceso por medio del cual la reducción de la inflación desestimula la inversión debido a que las tasas de interés se reducen más lentamente que aquella, con lo que los costos financieros reales de las empresas aumentan. Esto en efecto se da cuando se aplican políticas ortodoxas de estabilización. Sin embargo, en la política propuesta por nosotros ese rezago no se presenta por el hecho que "administrativamente" reducimos la tasa de interés el mismo "día D".

Un segundo proceso, bien conocido como efecto Olivera-Tanzi, da lugar a aumentos endógenos en la recaudación tributaria cuando se procesa la desinflación, con lo que se reduce la demanda agregada. Esto sin embargo, sólo es temporal, ya que el gobierno - en presencia de mayores ingresos - vuelve a vertir los recaudos al flujo circular a través de mayores gastos corrientes (y, más adelante, también de inversiones).

En tercer lugar, con la desinflación se reduce el "impuesto inflacionario", estimulando así la demanda de bienes y servicios de la población (y la monetización de la economía, que permitiría una política monetaria menos restrictiva). Es cierto que -dada la baja inflación que resultaría de la aplicación de este Programa- el gobierno no estará en condiciones de recaudar elevados niveles del "impuesto

inflacionario" (que de todas maneras podría estar en torno al 1-2% del PIB, si se tiene presente que la demanda de saldos monetarios aumentará con este programa, en presencia de una aún apreciable inflación del 15%).

Cuarto: con la reactivación y desinflación relativamente abruptas mejoran las expectativas generales en torno a la economía, con lo que se apreciaría una tendencia a la "desdolarización" de los portafolios empresariales y familiares. Esto tiene, a su vez, un efecto desinflacionario al reducir las presiones sobre el tipo de cambio (cierto que la monetización resultante ejercería el efecto contrario, aunque no lo compensaría totalmente).

En quinta instancia, el incremento de la inversión del gobierno tenderá a generar un efecto estimulante de arrastre ("crowding-in") de la inversión privada, contrariamente a lo planteado por los modelos ortodoxos (se calcula que, para el Ecuador, ese efecto es de 0.7 en periodos de auge).

Finalmente, con la reducción de la inflación se incrementan los salarios reales, estimulando la (comprimida hace dos lustros) demanda de consumo.

En resumen, por donde se le mire, la desinflación abrupta procesada a partir de instrumentos no-ortodoxos estimula la demanda agregada, tanto por la expansión del consumo, como por el de la inversión; en ambos casos, tanto del sector privado,

como del sector público (y, más aún, por la redistribución del Ingreso Nacional a que da lugar, favoreciendo a los estratos con propensiones a consumir mayores).

En sí, la rebaja inflacionaria, reduce el potencial del conflicto innato a estos procesos. Ello generará expectativas optimistas generalizadas. Ese sería un elemento adicional, invisible, de la reactivación generalizada. Las tendencias especulativas en la economía -en el comercio de bienes y servicios, en el mercado financiero y en el cambiario- se reduciría así, mejorando la tasa de ganancia en los segmentos productivos de la economía.

En añadidura, es de esperarse que en el proceso, en forma endógena, se reduzca también el margen de ganancia (con lo que se alentaría el círculo virtuoso aludido). Porque, en presencia de la actual recesión productiva, los empresarios no tienen otra alternativa que aumentar tal margen, tanto para cubrir los costos fijos y alcanzar una cierta masa de ganancias, como para asegurar su autofinanciamiento (en presencia de altas tasas activas de interés).

Todo ello permitiría estimular la expansión de la demanda interna para copar la elevada capacidad ociosa de producción (hasta que su uso alcance los dos turnos), tanto endógenamente, como a partir de medidas adicionales como: el crédito preferencial a los

segmentos "tradicionales" (urbano y rural) de la economía; incrementos salariales de los segmentos bajos que vayan más allá de la inflación (y que equivalgan, cuando menos, a los aumentos de la productividad); medidas conexas dirigidas a reducir el mark-up; recorte de los impuestos indirectos y aumento de los directos; eliminación de las barreras para-arancelarias, etc.

Debe tenerse presente, sin embargo, que es necesario acompañar estas medidas de precios relativos con otras que actúen sobre la demanda agregada, para evitar caer en el polo opuesto, es decir en un sobrecalentamiento de la economía (y, asimismo, en un deterioro de la balanza de pagos y de las cuentas fiscales).

3.2. Precondiciones disponibles

Dadas estas medidas y sus consecuencias reactivadoras (del sector moderno-urbano), nos preguntamos si existen las condiciones efectivas en la economía como para reactivarla rápidamente, sin que encuentre obstáculos en su camino. En este sentido habría que preguntarse, por ejemplo, si existe capacidad ociosa de producción (y hasta cuando), si las divisas disponibles son suficientes para hacerlo (y por cuanto tiempo), si la oferta agropecuaria no representa un cuello de botella para ello.

En pocas palabras, ¿hasta qué punto existen actualmente las condiciones

requeridas para romper el círculo vicioso que aqueja la economía ecuatoriana desde hace, por lo menos, una década? A responder esta compleja cuestión le dedicaremos esta sección.

La posibilidad de reactivar la economía, a la vez que se reduce sustancialmente la tasa de inflación, está dada por varios factores que trabajan a nuestro favor (activos), pero también hay algunos que van a contracorriente (pasivos) y que deberán matizarse, neutralizarse o eliminarse al inicio o durante el trans-curso del proceso estabilizador.

Veamos los activos. En primer lugar, ya hemos visto que las políticas ortodoxas han llevado a una elevada capacidad ociosa de producción (COP), que oscila en torno al 25% del Producto Potencial para la economía como un todo. En el caso del sector industrial y de la construcción, incluso, los estimados la calculan en un elevadísimo, pero realista, 45% (CEPLAES, 1991).

De otra parte, en segundo lugar, la economía ecuatoriana no se ha dolarizado aún en forma extrema y la demanda de saldos monetarios aún sigue relativamente elevada, de manera que una política bien implementada no llevará a recortar las tenencias de dinero (nacional), sino que habrá un amplio margen para su crecimiento. Esto permitirá expandir la oferta monetaria a ritmos relativamente

elevados, cuando menos inicialmente, sin ejercer presiones exageradas sobre los precios.

Tercero: Los márgenes de ganancia, como hemos señalado, siguen relativamente altos, pero la masa de ganancia parece haberse estancado; por lo que una reactivación que no reduzca el margen de ganancia (o lo haga sólo levemente) permitirá incrementar la tasa de ganancia sobre el capital (al elevar la masa de ganancias).

En cuarta instancia, gran parte de la población -sobre todo, la que no está en condiciones de indexar sus ingresos a la inflación- espera una política estabilizadora que les permita recuperar siquiera una parte de los ingresos reales perdidos durante la década pasada. Con lo que el gobierno podrá contar con un apoyo popular masivo (al margen de si lo aplica un gobierno recién llegado al poder), siempre que el proceso no comprima aún más el poder general de compra.

A ello se añade la esperanza de contar, sobre todo si ésto se puede realizar al inicio de un gobierno, con el apoyo político generalizado luego de las elecciones. Más aún si se procesa la reactivación. En añadidura, el gobierno que accederá al poder en agosto tendrá el pleno respaldo de todos los grupos empresariales, con lo que podrá utilizar tal *bona fide* para estimular la inversión productiva.

Quinto: Con el programa se podrá reducir sistemática y sustancialmente la drástica distorsión de precios relativos, en que -como hemos visto- unos se encuentran atrasados (precios públicos, precios agropecuarios, tipo de cambio y remuneraciones) y otros adelantados (tasas de interés activas, precios industriales y presión tributaria indirecta). Una política que encuentre las relaciones "adecuadas" entre esos precios será bienvenida por todos (incluso por los "sobreajustadores", quienes gozarán de mayores ventas, si bien a precios relativos más bajos). Se verá que en nuestra propuesta -cuando menos, en el corto plazo- todas las fracciones económicas se verán favorecidas, en especial, los campesinos y los "informales", pero también el gobierno, los asalariados urbanos y los capitalistas. Probablemente los únicos perjudicados serían los grupos que se benefician con la alta tasa de inflación: comerciantes, financieras, casas de cambio y, por supuesto, "especuladores" en general.

Finalmente, probablemente el tema más delicado, tiene que ver con la posición de la **Reserva Monetaria Internacional** (RMI). En el transcurso del primer semestre de 1992 el país habría perdido casi US\$ 300 millones de su RMI. Revisando la balanza de pagos observamos que el valor de exportaciones, de la inversión extranjera y de los desembolsos no ha caído, que tampoco ha aumentado el servicio de la deuda externa, por lo que aquella caída podría explicarse básicamente por

dos factores: la huida de capitales y la abrupta alza de las importaciones.

En cuanto a la "huida de capitales", ella se detecta, tanto en el rubro de "remisión de utilidades al exterior" como en el de "errores y omisiones" (que reflejaría parcialmente la sobrevaluación de importaciones y la subvaluación de exportaciones). Paralelamente está en marcha un creciente proceso de "dolarización" de los portafolios, tanto de las grandes empresas, como de las familias pudientes del país.

El problema se agrava al considerar el rubro de las importaciones de bienes, que ha aumentado aceleradamente, cuando menos por los siguientes motivos:

a) La creciente sobrevaluación del sucre respecto al dólar y la rebaja arancelaria, que estimuló las compras externas;

b) El levantamiento de la prohibición de importar automóviles (que regía desde hace dos lustros), que durante 1992 ascendería a la apreciable suma US\$ 100' (CEPLAES, 1992: 73);

c) La ampliación en 40% del cupo semanal para las "rondas de divisas"; y, sobre todo,

d) el "adelanto" de importaciones por parte de las empresas, en la expectativa que el próximo gobierno inicie su ges-

ción con una fuerte devaluación (que se estima entre 15 y 20% sólo para recuperar "paridad").

Si estimamos que en 1992 las importaciones de bienes serán de alrededor de US\$ 2500' (según el BCE sólo llegarían a 2260'), tenemos que la RMI de US\$ 400' (que se tendría hacia el 10 de agosto de este año) equivaldría a poco menos de dos meses de importaciones; es decir, algo por debajo de "lo aceptable" (que en un estimado muy burdo serían 3 meses). No sería por tanto un "colchón" seguro para emprender una reactivación acelerada. En efecto, ello parecería crítico a primera vista; pero, si tenemos presente el enorme inventario de importaciones acumulado durante los últimos 7-8 meses, tendremos que una reactivación como la propuesta por nosotros no elevará en demasía las importaciones (cuya elasticidad-producto es de alrededor de 1,2 en tiempos "normales"; y podría encontrarse, por esta razón, en torno a sólo 0,7 para el primer año de gestión del próximo gobierno).

En relación a los pasivos (o lo que podría considerarse como "obstáculos" al programa) habría que contar con los siguientes, lista que no es exhaustiva y que no señala orden de preeminencia alguno.

El primero y más complejo de revertir está relacionado con la "mentalidad" empresarial, que no acepta hoy en día la intervención estatal, sobre todo en

materia la determinación de los precios básicos de la economía (la que, sin embargo, sería mucho mayor en el caso de una propuesta de congelamiento de precios administrados). En general, la manipulación de precios relativos sólo es favorecida por el empresariado (como un todo o fraccionariamente) cuando lo beneficia -en cuyo caso no se considera que es una "manipulación"-, como cuando las devaluaciones van más allá de la inflación relativa (subvaluación del tipo de cambio) y se fijan los salarios mínimos por debajo de la inflación... que son los puntos centrales de las políticas neoliberales.

A este efecto, puede contra-argumentarse convincentemente que la política que proponemos tiende a la reactivación y a aumentar la masa de ganancias empresariales. Sin embargo, hasta que esto no se dé, las expectativas empresariales seguramente actuarán contra el programa. En general, aún cuando estuvieren de acuerdo con él, sin embargo, dada la fobia anti-estatal -en importante medida justificada- será difícil revertir esta tendencia en los primeros meses de aplicación de la política.

Probablemente el único sector de la economía que se opondrá a este esquema de estabilización será el bancario y de las empresas financieras (en menor medida, el sector comercial), si bien el "spread" (la diferencia entre las tasas activas y pasivas) no tiene por qué cambiar (en términos porcentuales), a la vez que aumenta el

nivel de préstamos y depósitos. Pero, en contrapartida, seguramente se podrá contar con el apoyo de los organismos internacionales; puesto que incluso éstos ya están entendiendo que enfrentar procesos inflacionarios inerciales es costoso, al implicar elevados costos sociales si se aplica la receta ortodoxa (que, además, exige una aplicación sostenida y consistente por varios años antes que se observen los primeros resultados positivos). En añadidura, como no habrá una congelación generalizada de precios, no se podrán oponer a un programa como el expuesto por nosotros (indudablemente se requiere un buen equipo negociador nacional para enfrentar posibles "dudas" y "reclamos" de las Misiones foráneas).

Por lo demás, debe recordarse que -tal como está constituida hoy en día la economía ecuatoriana- no hay propiamente libertad de precios. Así, de un lado, la existencia abrumadora de oligopolios implica en sí y de por sí un alto grado de control y "administración" de precios por parte de las empresas y conglomerados económicos. De otra parte, la libertad económica en general tampoco puede existir en un país en que la distribución del ingreso es tan desigual y el poder económico tan concentrado; es decir, donde no hay ni "libertad de elegir", ni "igualdad de oportunidades", objetivos tan apreciados -en teoría- por los economistas ortodoxos.

Un segundo elemento que actúa en contra de esta política, podría argüirse, es atribuible a la corrupción, inpreparación e ineficacia de la burocracia para la implementación de un programa de este tipo. Esto es lo primero que se argumentará por parte del gran capital privado; pero estos "argumentos" amenguarán apenas se sientan los efectos de la reactivación generalizada y la desinflación selectiva (este adjetivo hace alusión al hecho que la inflación "moderna" anual apenas llegará al 5%, mientras que la de los segmentos tradicionales podría alcanzar el 20-25%; lo que da un promedio ponderado en torno al 15%).

En tercer lugar, constatamos los reprimidos "espíritus animales" de los empresarios; tanto por la falta de un mercado interno en expansión (en presencia de bajos niveles de ingreso y una muy desigual distribución del ingreso), como por la incertidumbre que viene generando la política ortodoxa gradualista. Estimamos, en cambio, que la política no-neoclásica, aquí presentada a grandes rasgos, permitirá revertir esas tendencias a un ritmo relativamente veloz.

Con lo que, en pocas palabras, tenemos a nuestro favor: disponibilidad de divisas, alta capacidad ociosa de producción, elevados mark-up, salarios retrasados, alta tasa de interés, persistentes grados de inercia en ciertos segmentos económico-sociales. Estos stocks y precios relativos, por tanto,

justifican la aplicación del programa y otorgan pautas viables para aplicar una política alternativa de estabilización, que pueda -a la vez- reactivar la economía y redistribuir progresivamente la Renta Nacional, sin causar desequilibrios en las cuentas externas y/o fiscales.

3.3. Peligros reales y potenciales del Programa y acciones adicionales

De ahí que, probablemente, uno de los riesgos mayores de esta estrategia de estabilización radique, paradójicamente, en los éxitos fáciles que se logran en sus primeros meses. Lo que, como lo muestran las experiencias estabilizadoras "heterodoxas" de mediados de los años ochenta (Ocampo, 1987), pueden llevar a engaño, sobre todo si son lideradas por políticos que desconocen la dinámica económica y que además están ansiosos de ganar o acrecentar su fama y su poder en el corto plazo.

En tal sentido, los asesores económicos deberían evitar la euforia del gobierno, que con los éxitos iniciales puede ilusionarse y creer que ha resuelto todos los problemas. Habrá que insistir en la necesidad de endogeneizar a los políticos en nuestros modelos económicos (Lindbeck, 1976). En tal sentido, debe insistirse que esta propuesta de política sólo "otorga oxígeno" temporalmente, en el sentido que baja la inflación y reactiva la economía por un cierto lapso. Terminado este periodo de

gracia, se enfrentarían nuevamente y a escala ampliada los problemas de inflación y desequilibrio de balanza de pagos, si a lo largo de aquel no se actúa sobre varios frentes (que se van convirtiendo en limitaciones para la expansión productiva).

Todos estos resultados positivos dan que pensar (por no decir, serán sospechosos), desde que así la propuesta no convencional parecería una "receta mágica". Ahora debemos señalar algunas limitaciones, anunciando que no necesariamente se alcanzará el Nirvana por su aplicación; sobre todo, si no se entiende la dinámica del proceso, que ciertamente presenta sus bemoles.

A medida que se aplica esta propuesta relativamente ecléctica se van recorriendo los diversos "activos" iniciales, los que -sobre todo, en base a la concertación social- deben ser recuperados en ese lapso, tanto para ampliar la capacidad de producción manufacturera y agropecuaria, como para impedir la acción de la restricción externa.

Veamos alguno aspectos delicados sobre los que debe ponerse la atención para evitar el fracaso del programa (y que, en lo posible, deben enfrentarse desde el inicio de su aplicación):

a) En primer lugar, debe tenerse presente que la reactivación económica, como consecuencia del aumento salarial y la reactivación del segmento "moderno" de la economía, lleva a un incremento

espectacular de la demanda de productos agropecuarios. Si la oferta agrícola (de insumos para la industria y de bienes para el consumo de las familias urbanas) es inelástica, tendremos una fuerte presión inflacionaria, tanto por el lado de la demanda (consumo), como por el lado de los costos (en la ecuación de precios de la agroindustria aumentaría el componente de insumos nacionales). Esto es lo primero que requiere compensación.

Desde que la rígida oferta agropecuaria para el mercado interno sería una de las principales limitantes del programa, dado que -por la reactivación- podría generar nuevas presiones inflacionarias (que en parte se buscan, ya que ello permite transferir excedentes de la ciudad al campo). Esto obliga a establecer una política selectiva de fomento a la agricultura -especialmente la campesina que oferta la mayor proporción de alimentos para el mercado interno- a efectos de asegurar la estabilización en el mediano plazo. Y, en general, se propendería a favorecer la producción de bienes de masa, así como aquellos que generen o que ahorren divisas.

b) Segundo: No todas las empresas tienen la misma estructura de costos como la supuestamente "típica", arribada bosquejada (las ponderaciones de cada uno de los "factores de producción" varía, a veces extremadamente, entre empresa y empresa).

Así, las más intensivas en trabajo verán que sus costos se incrementarán más que los del resto (porque el aumento de los salarios ha sido sustancialmente superior al de las demás componentes de costos); y, generalmente, serán las más pequeñas. A éstas debe compensársele con asesoría técnica, compras estatales y ciertos subsidios a la producción, a través de crédito preferencial (o, incluso, con la liberación del IVA, que ciertamente pagan pocos en ese segmento; si bien ésto tampoco es deseable en el marco de la "educación tributaria" que requiere el país).

También las empresas intensivas en insumos nacionales cargarán con un mayor peso que las que son más dependientes de la importación de insumos (ya que los precios "flexibles" aumentarán a tasas superiores a los precios de importación).

Finalmente, las empresas más endeudadas tenderán a beneficiarse, frente a las que se financian fundamentalmente de recursos propios.

c) En tercer lugar, es posible que, durante los primeros meses (uno a dos) de aplicación del programa no-neoclásico de estabilización se dé una leve recesión, resultante del pesimismo empresarial frente a cualquier esfuerzo estabilizador. En añadidura, ya que durante los últimos meses del gobierno de Borja han acumulado crecientemente inventarios -especulando a favor de un paquete de medidas para agosto o

septiembre de este año-, los irían reduciendo -es decir, la producción decaería por un tiempo- cuando se hubiesen adoptado las medidas esperadas y hasta que no vean algunas luces en el túnel. Pero esta situación se revertirá rápidamente con la expansión de las ventas en forma endógena al programa.

d) Cuarto: debido al proceso de desinflación relativamente radical, debe esperarse una monetización igualmente drástica en la economía, especialmente cuando el círculo virtuoso comience a actuar. En esa circunstancia habría una tendencia -por parte del Banco Central- a ensayar una política monetaria demasiado expansiva -en concordancia con el aumento de la demanda de dinero- que podría ser altamente peligrosa. En tal sentido, las autoridades monetarias deben precautelar ese efecto con políticas moderadamente expansivas en términos de la reducción del encaje y las tasas de descuento, no sólo a partir del momento que se observen las primeras señales de sobrecalentamiento de la economía.

Debe notarse, sin embargo, que la reactivación tiene que ser relativamente conservadora -y monitoreada muy de cerca por el gobierno- para evitar tropezar con ciertos cuellos de botella sectoriales o que se puedan presentar en determinadas ramas económicas. Lo que obliga a la necesidad perentoria de estudiar -en base a una Tabla de Insumo-Producto actualizada- los peligros que se

puedan afrontar en lo inmediato. Y en esos campos, donde se vayan detectando dificultades y fricciones, habría que concertar con el empresariado y, probablemente, otorgarles algunos estímulos temporales y muy selectivos para que puedan surtir adecuadamente la demanda expandida.

Dado que es probable que, desde el principio, se pierdan reservas de divisas, el Programa requiere adoptar -desde un inicio- políticas de fomento dirigidas a la sustitución de importaciones esenciales y a la promoción de exportaciones no tradicionales. Esto requiere inversiones previas, intensos esfuerzos de Investigación y Desarrollo (de productos y de procesos), información sobre mercados e insumos y tecnologías, etc.

A todo lo anterior acompaña el hecho que -hoy en día- la inflación está, a pesar de su alto nivel, reprimida en ciertos sentidos. En la propuesta sometida a discusión por nosotros se la "abriría" completamente, lo que ejercería una serie de efectos positivos adicionales; en especial, sobre la asignación de recursos. Así, los salarios han ido creciendo por debajo de la productividad en el pasado; lo que ya no sucedería y con lo que se estimularían alzas apreciables en la productividad de la fuerza de trabajo. Asimismo el leve retraso del tipo de cambio sería recuperado, con lo que se alentarían ciertas exportaciones. Finalmente, el alza de precios públicos reales

contribuiría a sanear las cuentas públicas y sobre todo ampliaría el margen de acción autónoma del gobierno (permitiendo transferencias de ingresos a los segmentos "tradicionales" de la economía, que tienen una alta productividad del capital).

Todo lo anterior obliga a adoptar medidas que contengan -sobre todo cuando exista el peligro de tropezar con la restricción externa y/o con la capacidad instalada de producción- el crecimiento de la inversión y, sobre todo, del consumo interno. Lo que nos lleva a cuidar esos dos frentes, desde el inicio del programa, tanto la restricción externa, como la limitación que impone la capacidad de planta (tanto al nivel de la economía como un todo, como de la industria en especial).

Respecto a la balanza de pagos se requiere adoptar medidas varias de promoción a una sustitución selectiva de importaciones y a la diversificación del perfil de exportaciones. En cuanto a la capacidad instalada de producción debe actuarse concertadamente con el campesinado, por un lado, y con los gremios del sector "moderno" que produce bienes "básicos", por el otro.

Por lo demás, frente a los diversos riesgos que pueden surgir a lo largo del programa (al que habría que añadir posibles rebotes de la inflación como consecuencia de choques externos), el gobierno y, más específicamente, el equipo económico, debe guardarse

"bajo la manga" posibles medidas compensatorias, sin anunciarlas desde un inicio (reduciendo trabas pararancelarias; recortando trámites burocráticos; etc.). O, teniendo presente la propuesta esbozada, quizás no convenga bajar la inflación tan rápidamente de un año a otro e ir más paulatinamente (y, por ejemplo, dejar de reducir el IVA en primera instancia y sólo hacerlo cuando la presión de costos de insumos agrícolas así lo exigiera; o aumentar salarios y/o devaluar a una tasa más baja que la propuesta arriba).

Debe notarse, por otra parte, que varios factores podrían contribuir a reforzar el círculo virtuoso proveniente de la expansión económica con desinflación: La reducción de los márgenes de ganancia, tanto de la industria, como de los comerciantes (que se compensaría con mayores ventas); el aumento de la productividad del trabajo, como de los otros "factores" (como consecuencia de la reactivación y el aumento de remuneraciones); la recuperación de los "espíritus animales" de los empresarios (ante la expansión de la demanda efectiva); el aumento súbito del empleo; la renegociación de la deuda externa; etc.

Al respecto el equipo económico debería ser muy claro afirmando que el programa otorga "oxígeno" por un lapso no mayor a los 9 y hasta los 12 meses (que es lo que soportan los activos actualmente disponibles), que deben ser aprovechados para llevar a cabo las

reformas más profundas. No hacerlas lleva al caos, en la medida en que se tropezaría con la capacidad instalada, se acabaría con la RMI, se dispararían los precios agrícolas, entre otras limitantes. Con lo que el programa terminaría en una situación peor que la inicial, sobre todo por la amenaza de mayores niveles de inflación a los actuales e incluso, en el peor de los casos, en la hiperinflación.

La aplicación de esas medidas, a la vez, reactivará endógenamente la economía, debido a una serie de efectos inherentes al proceso, como hemos visto. Ello obliga a ser cauto y a tomar precauciones con las políticas exageradamente expansivas de la demanda agregada que derivan automáticamente de la propuesta. El monitoreo permanente de las variables claves de la economía sería una exigencia de primer orden; lo que debe venir acompañado de sistemas de concertación con grupos empresariales para determinar los ajustes requeridos sobre la marcha.

Para terminar, conviene añadir a todas las anteriores algunas propuestas parciales adicionales a la solución del problema inflacionario en el Ecuador, que consistirían en la puesta en marcha de diversas medidas complejas que acompañarían a la modalidad de estabilización reactivadora arriba expuesta. Entre ellas cabe destacar las siguientes:

a) Postergar el servicio de la deuda, ya que el aumento de los impuestos para cumplir con el servicio de la deuda es una decisión política poco vendible, particularmente en economías en las que los conflictos distributivos conducen inevitablemente a fuertes presiones sobre el presupuesto público.

b) A la larga, la estabilización sólo será conseguida si se reducen los déficits fiscales estructurales (nótese que el Ecuador ya ha alcanzado un ahorro gubernamental positivo), principalmente los que derivan de las presiones del servicio de la deuda externa (que han ido elevando astronómicamente la deuda interna del gobierno). Básico en ese proceso será, asimismo, el saneamiento de las empresas públicas, en términos de precios adecuados, personal idóneo, costos más ajustados a la realidad e inversiones mejor implementadas.

c) Para el corto plazo, en caso que la reactivación no permita el aumento esperado de la recaudación, se podrían adoptar la siguiente medida relativamente radical, pero efectiva: cargar un impuesto único del 5-8% a todos los bienes duraderos y de capital asegurados (lo que otorgaría un cierto respiro en momentos de angustia en materia de caja fiscal).

d) A largo plazo, todo ello exige una reforma integral del Estado (las propuestas específicas están contenidas en

"Ecuador Siglo XXI, 1992b), cuyas componentes llevaría muy lejos detallar aquí.

e) Convencer al capital monopólico que al mercado externo no le será tan rentable como esperan y que podrían ampliar sus ventas internas (y con ello sus ganancias) si estimularan -desde el gobierno- la demanda interna (Debe insistirse que las condiciones de los mercados internacionales no serán muy favorables a lo largo de los años ochenta, como lo pronostican los principales organismos internacionales).

Pero ello exige que reduzcan en alguna medida -al ritmo que se reactiva la economía- su margen de ganancia sobre los costos primos; e incluso que modifiquen sus modalidades tradicionales de acumulación, de tal manera que se procese una integración nacional mayor, expandiendo los mercados domésticos y las fuerzas productivas internas, concatenando sectores productivos, descentralizando la economía.

f) Esencial para acabar con la alta inflación es reducir el (potencial) conflicto distributivo, que hoy en día sólo se da ventajosamente para el gobierno y el sector privado oligopólico, a costa de las capas medias y los sectores populares. Esa puja por el Ingreso Nacional, si bien aún no se ha generalizado (pero se está incubando), puede llevar -eso sería incluso deseable, en el sentido que impediría un deterioro aún mayor de la distribución

funcional del Ingreso- a la organización de la sociedad civil mayoritaria contra el gobierno y contra los sectores modernos concentrados, grandes beneficiarios de la inflación en curso (el primero por el impuesto inflacionario, el segundo por su capacidad de imponer un creciente margen de ganancia y por su capacidad de vender en el mercado externo). Aunque ese proceso llevaría a un régimen inflacionario crónico típico (o ideal), permitiría recuperar la economía de su estancamiento. Posteriormente se podría aplicar un choque de costos relativos, como lo presentáramos en este documento.

g) Con la desinflación que se lograría en un inicio con este programa, paralelamente deben gestarse mecanismos de concertación. Esto será posible, recién, a los tres o cuatro meses de gestión no-ortodoxa, cuando no sólo la inflación haya bajado al 1.3 o menos por ciento mensual, sino cuando se observen ya los primeros indicios de recuperación económica.

h) Indudablemente la búsqueda e implantación de un nuevo modelo de acumulación será esencial para enfren-

tar la inflación y todos los demás problemas que enfrenta hoy la sociedad ecuatoriana; pero éste es un tema que nos lleva demasiado lejos para tratarlo aquí.

4. CONCLUSIONES ·

- Sintetizando, el propósito central del programa no convencional de estabilización consistiría en romper la tendencia inflacionaria existente, a efectos de evitar que se consagre una inflación crónica en el país y, en el peor de los casos, una hiperinflación. Con ello se quiere eliminar el peligro de caer en una alta inflación inercial, régimen que es tan susceptible a choques (de oferta y demanda), que llevarían a plataformas inflacionarias cada vez más elevadas (y, con ello, a un estancamiento aún más profundo del aparato productivo).

El componente central de estos lineamientos de estabilización reactivadora radica en la manipulación de las principales "variables de costo", como hemos visto. A consecuencia de su aplicación se desalentarían las actividades especulativas (financieras y comerciales) a favor de las propiamente

² Cuando terminamos de redactar este artículo, nos llegó una valiosa propuesta de estabilización reactivadora de Germán Creamer (1992), que parte de un modelo similar al nuestro (una diferencia central radica en el hecho que el autor no incluye las tasas de interés y el capital de trabajo en la ecuación de costos del segmento "administrado" de la economía), aunque va en líneas de política distintas -aunque complementarias en gran parte- a las presentadas arriba. Consúltese también De Janvry et al (1991) para una propuesta distinta a las ortodoxas para el Ecuador.

te productivas; y, con la reducción drástica de las tasas de interés, aparte que se descargaría a las empresas de sus actualmente muy altos costos financieros, no se recortaría ni el ahorro (que crecería con la reactivación), ni la inversión (a través de la expansión del Ingreso Nacional), sino que se las fomentaría luego de diez años de estancamiento.

Es decir, se trata de una propuesta que contrasta frontalmente con los efectos desequilibrantes de una política neoliberal, en la que el alza de las tasas de interés, la contención de los salarios y la devaluación llevó siempre a la "dolarización" de la economía (es decir, a la reducción del ahorro en moneda nacional), a una redistribución regresiva del Ingreso Nacional y al estancamiento del aparato productivo, con la consiguiente proliferación de actividades especulativas y subterráneas (recortando la inversión productiva doméstica). Esa combinación de alto precio del crédito y tipo de cambio reprimido llevaba a incertidumbre y fuga de capitales (cuando el diagnóstico ortodoxo señalaba que las altas tasas de interés lo iban a impedir).

Comprensiblemente, en un contexto de esa naturaleza, con recesión, inflación, desempleo, especulación, etc., no puede pensarse realísimamente en llevar a cabo propuestas de política y reformas estructurales para el largo plazo, que es lo que en este momento el Ecuador

requiere con urgencia. En la práctica, por tanto, el ajuste neoliberal da lugar a dinámicas que impiden adoptar medidas coincidentes con una estrategia de mediano y largo alcance. Menos aún puede contemplar las medidas indispensables requeridas para iniciar el pago de la "deuda social".

Sin embargo, la aplicación de este Programa Gradualista, alternativo al actualmente vigente, requiere un intenso período de preparación, a efectos de tener un conocimiento exhaustivo, tanto de las ecuaciones de precios más adecuadas a la realidad ecuatoriana actual, como de los impactos directos e indirectos que ejercerá el "paquete" propuesto de políticas sobre toda la economía y la sociedad en su conjunto (así como de las reacciones desestabilizadoras que pudieran ejercer grupos minúsculos pero poderosos que se perjudicarían -en el corto plazo- con las medidas).

De ahí que los ejercicios de desinflación planteados en este ensayo no puedan adoptarse al pie de la letra, tal como han sido presentados. Aún falta recabar información detallada y hacer muchos estudios respecto a la ecuación de costos, a las distintas modalidades de determinación de precios, a los impactos del proceso en la demanda efectiva, en la distribución del ingreso y en la balanza de pagos, así como respecto a la respuesta de la oferta agropecuaria ante la expansión de la demanda.

El aspecto más importante consistirá en establecer una ecuación precisa de costos para una "empresa típica" del segmento moderno-oligopólico de la economía ecuatoriana, a efectos de calibrar precisa y detalladamente el impacto de las medidas. Igualmente debe estudiarse el caso de las pequeñas empresas intensivas en trabajo, con la intención de diseñar medidas compensatorias frente al alza salarial. Luego debe establecerse la interacción con el segmento de precios "flexibles" (Véase, para un modelo completo de tales interdependencias, Frenkel, 1990).

A todo ello faltaría añadirle lineamientos precisos para el diseño de las políticas fiscal y monetaria, del manejo que habrá que hacer de la deuda externa, de la reforma del Estado, etc.; todo lo que llevaría muy lejos en este espacio.

En tal sentido, nuestra propuesta sólo busca ilustrar una posibilidad, más que proponer un conjunto específico y bien calibrado de medidas. Donde lo importante es resaltar la existencia de una alternativa específica y viable a las políticas ortodoxas de estabilización. Porque, hoy en día, todos creen aún que existiría, ya no sólo una teoría económica, sino asimismo una sola política anti-inflacionaria independientemente de tiempo y espacio.

La política que proponemos es compleja. Pero, para el difícil caso que tenemos entre manos, no hay receta sencilla. Esta sólo existe en la

imaginación de los economistas ortodoxos; lo que, dicho sea de paso, es su gran ventaja, ya que el remedio "universal" que propugnan es fácilmente comprensible y, por tanto, vendible (aunque no se conozcan bien sus consecuencias, excepto que tiende a beneficiar tendencialmente a los "grupos financieros" en el país).

En este caso no se puede improvisar - como se hiciera a mediados de los años ochenta durante la aplicación de los Planes Austral, Cruzado e Inti, que pretendían convertirse en una alternativa a la ortodoxia-, a efectos de evitar, no sólo los desabastecimientos masivos y la informalización, sino también el conflicto distributivo que en esos países, tarde o temprano, culminó en procesos hiperinflacionarios. Cometer los errores que ellos hicieran entonces sería un lujo que no nos podemos dar; y el estudio profundo de esas experiencias ayudará indudablemente en ese sentido.

- Estimamos que nuestra propuesta de estabilización no será adoptada en el plazo corto, básicamente porque, tanto el gobierno, como el gran capital, se vienen beneficiando de la inflación a costa de la gran mayoría de la población. De manera que, desafortunadamente, parecería que sólo cuando fracasen radicalmente los planes ortodoxos -es probable que en el transcurso del segundo semestre de este año se intente una nueva arremetida en ese sentido- y cuando la inflación perjudique a empresarios y gobierno por

igual, se intentará buscar vías alternativas serias de estabilización.

A continuación esbozaremos los criterios que se tendrían que dar -en el peor de los casos- para que ello suceda. En nuestra opinión, la estabilización -en nuestra propuesta alternativa- sólo se iniciaría francamente cuando se conjuguen varios factores (que afectarán al gobierno y/o al gran capital, en ausencia de una sociedad civil en condiciones de exigirle efectivamente sus demandas a los grupos hegemónicos):

a) Cuando la inflación peligre frísele de las manos al gobierno, con lo que se gestarían graves situaciones de conflicto social y la amenaza de hiperinflación;

b) Cuando la presión del FMI y los acreedores externos se haga incontenible y/o la reserva monetaria internacional vuelva a caer a niveles irrisorios;

c) Cuando el grado de monetización (M1/PIB) de la economía se haya reducido al mínimo, con lo que el gobierno ya no podría cobrar cómodamente el "impuesto inflacionario", teniendo que recurrir necesariamente a fuentes "auténticas" de recaudación;

d) Cuando el gran capital comience a perder (por la baja dramática de la ta-

sa de ganancia), tanto porque la actividad productiva siga languideciendo, como y sobre todo, porque las actividades especulativas tropiecen con su límite en el marco de una desactivación generalizada de la producción;

e) Cuando se observen signos graves de "ingobernabilidad", peligrando la "seguridad nacional" (huelgas masivas, descontrol popular, pugnas parlamento-ejecutivo, conflicto gobierno-empresa privada, amenaza de golpe militar, etc.).

Probablemente, cuando se de una explosiva combinación de varios de los factores arriba mencionados, recién el gobierno y sus aliados empresariales promoverán una política seria de estabilización; aunque seguramente en la equivocada dirección de un "choque ortodoxo". La propuesta aquí presentada se ofrecería entonces como una alternativa a esa tendencia (si no es ya demasiado tarde).

No creemos necesario, sin embargo, que se alienten situaciones tan caóticas para iluminar a los líderes políticos del país. Estamos convencidos que un esclarecedor debate nacional sobre esta y otras propuestas no-ortodoxas de estabilización y la presencia de nuevos estadistas en la escena política nacional permitirán la adopción de políticas macroeconómicas pragmáticas que, extrayendo las lecciones que nos

brindan los experimentos neoliberales y otras experiencias en América Latina y el Ecuador, sienten las bases de una estabilidad macroeconómica permanente que permita implementar las largamente rezagadas y necesarias políticas que contemplen el largo plazo y los problemas fundamentales del país.

Indudablemente la propuesta de estabilización esbozada arriba a grandes rasgos requiere de un complemento político: la concertación con las principales fuerzas sociales y políticas del país. Si bien en un inicio las políticas propuestas deben adoptarse - luego de su análisis concienzudo y pausado- con fuerza y autoridad, una vez que se observen los primeros resultados -desinflación y reactivación productiva- resultará indispensable establecer los marcos adecuados de negociación con los agentes económicos, tanto para adoptar las medidas principales de política económica en su fase siguiente, como para implementar las reformas más profundas que requiere el país (desde las que se refieren a la transformación productiva, pasando por las institucional-estatales, hasta llegar a las propiamente sociales-educativas-políticas). Con ello se contribuiría, asimismo, a evitar o suavizar el conflicto distributivo que está a la base del proceso inflacionario actual.

En ese proceso de concertación será central negociar acuerdos de produc-

ción e inversión con el sector privado, a efectos de enfrentar -una vez reactivada la economía- los diversos obstáculos y cuellos de botella que irán surgiendo previsiblemente, sobre todo en la capacidad instalada de producción, en la balanza de pagos y en la oferta agropecuaria.

- A lo largo de este trabajo nos hemos ocupado básicamente de los aspectos coyunturales de la inflación y de las políticas para enfrentarla en sus modalidades superficiales, sin ir a sus raíces. Ya hemos visto, a este respecto, que la inflación refleja problemas de fondo (de corto, mediano y largo plazos, así como contradicciones y conflictos económicos-sociales-políticos), por lo que la aplicación de políticas de estabilización *in vacuo* llevaría a "botar al niño con el baño".

De ahí que se requieran políticas económicas globales y sectoriales en el marco de reformas que reestructuren la economía y la sociedad ecuatorianas, en dirección a nuevas modalidades de acumulación, de convivencia y participación. Estos temas no se pueden tratar aquí (véase, al respecto, Ecuador Siglo XXI, 1992), ya que nuestro trabajo ha estado dirigido únicamente a plantear una alternativa de estabilización que haría viable tales propuestas de largo alcance. En tal sentido, muy ortodoxamente, insistimos en el *dictum* de acuerdo al cual sin una economía

estable y en recuperación no es posible plantear e implementar reformas de mayor alcance. La presente propuesta, de llevarse a cabo exitosamente, permitiría llevar a cabo este anhelo, después de dos lustros de frustraciones en base a políticas timoratamente ortodoxas.

ANEXO BIBLIOGRAFICO

Acosta, Alberto y Jurgen Schuldt (1992), Inflación y Estabilización en América Latina y el Ecuador, Quito, FLACSO-ILDIS (en preparación).

Alberro, José Luis (1987), "La dinámica de los precios relativos en un ambiente inflacionario", en: Estudios Económicos, octubre; pp. 267-304.

Bacha, Edmar (1982), Introducao a Macroeconomia, Rio de Janeiro, Ed. Campus.

BCE (1991), Cuentas Nacionales del Ecuador, No. 14, Quito, Banco Central del Ecuador.

Camard, Wayne (1991), "Trade and Industry in Ecuador: Business Groups and Structural Adjustment", mimeo., Stanford University.

CEPLAES (1991), Análisis de Coyuntura, no. 3; Quito, ILDIS.

CEPLAES (1992), Análisis de Coyuntura, no. 4; Quito, ILDIS.

Cortázar, René, Alejandro Foxley y Victor Tokman (1984), Legados del Monetarismo, Buenos Aires, Ed.

Creamer, Germán (1992), "Redistribution, Inflation and Adjustment Policies: A Macro Neo-Structuralist Model for Ecuador", Quito, PNUD, mimeo.

De Janvry, Alain, Elisabeth Sadoulet y André Fargeix (1991), "Politically Feasible and Equitable Adjustment: Some Alternatives for Ecuador", en: World Development, vol. 19, no. 11; pp. 1577-94.

Ecuador Siglo XXI (1992a), Estrategia de Desarrollo Económico y Social para el Ecuador, Quito.

Ecuador Siglo XXI (1992b), La Reforma del Estado en el Ecuador, Quito.

Fanelli, José María, Roberto Frenkel y Guillermo Rozenwurcel (1991), "Crecimiento y reforma estructural en América Latina", en: Crítica al Consenso de Washington, Lima, FONDAD; pp. 25-107.

Figueroa, Adolfo (1990), "Integración de las políticas de corto y largo plazo", en: Economía, Vol. XII, no. 23, junio; pp. 225-245. Departamento de Economía de la PUC, Lima.

Frenkel, Roberto (1990), "Precios Flexibles y Efectos Ingreso en Economías Indexadas", en: Eduardo Lora (ed.), *Inflación y Estabilización en América Latina: Nuevos Modelos Estructuralistas*, Bogotá, Tercer Mundo Editores-FEDESARROLLO; pp. 49-84.

Infante, Sebastián (1992), "El proceso inflacionario del Ecuador (1984-1991)", en: Rafael Urriola (ed.), *La Inflación en el Ecuador: Interpretaciones y Comentarios*, Quito, ILDIS; pp.17-49.

Kalecki, Michal (1953), *Teoría de la Dinámica Económica*, México, Fondo de Cultura Económica.

Lindbeck, Assar (1976), "Stabilization Policy in Open Economies with Endogenous Politicians", en: *American Economic Review*, mayo; pp. 1-19.

Lopes, Francisco (1986), *O Choque Heterodoxo*, Rio de Janeiro, Ed. Campus.

Modiano, Eduardo (1986), *Da Inflacao ao Cruzado*, Rio de Janeiro, Ed. Campus.

Nordhaus, William (1976), "Inflation Theory and Policy", en: *American Economic Review*, mayo; pp. 59-64.

Okun, Arthur (1981), *Prices and Quantities: A Macroeconomic Analysis*, Oxford, Blackwell.

Paredes, Pablo Lucio (1991), "La Década de los Ochenta: Lecciones e ideas para la teoría y práctica económica", Quito, IV Congreso Latinoamericano de Economistas; mimeo.

Rodríguez Rabanal, César (1991), *Cicatrices de la Pobreza*, Caracas, Ed. Nueva Sociedad.

Rowthorn, R.E. (1977), "Conflict, inflation and money", en: *Cambridge Journal of Economics*, no. 1; pp. 215-39.

Schuldt, Jurgen (1992), "La Acumulación de Capital y los Problemas de la Macroeconomía Ecuatoriana en el Periodo de Postguerra", Quito, Ecuador Siglo XXI, Proyecto CONADE-GTZ.

Taylor, Lance (1986), *Modelos Macroeconómicos para Economías Subdesarrolladas*, México, Fondo de Cultura Económica. Original en inglés de 1979.

Taylor, Lance (1987), "El Plan Austral (y otros choques heterodoxos): Fase II", en: *El Trimestre Económico*, vol. LIV, setiembre; pp. 155-75.

Thorp, Rosemary (1991), "El Ajuste y el Largo Plazo en el Perú", en: *Nuevos Rumbos para el Desarrollo*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos; pp. 195-206.

Thoumi, Francisco (1990), "The hidden logic of 'irrational' economic policies in Ecuador", en: *Journal of Interamerican Affairs*, vol. 32, no. 2.

Williamson, John (1990), "What Washington means by policy reform", en: J. Williamson, ed., *Latin American Adjustment. How Much has Happened?*, Washington, Institute for International Economics; pp. 5-20.

Guía Nacional de Servicios de Salud del Ecuador

Min. de Salud Pública, UNICEF, ILDIS

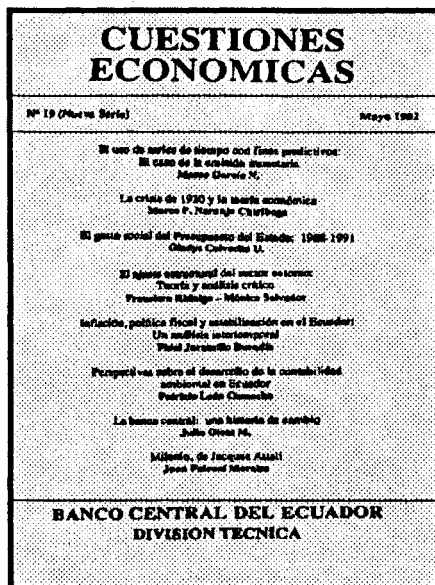
El esfuerzo de hacer una lista de las entidades que ofrecen servicios de salud en el Ecuador, tanto gubernamentales como no gubernamentales sin fines de lucro, constituye un gran impulso a la decisión del gobierno nacional de cumplir con el superior propósito de mejorar las coberturas de salud.



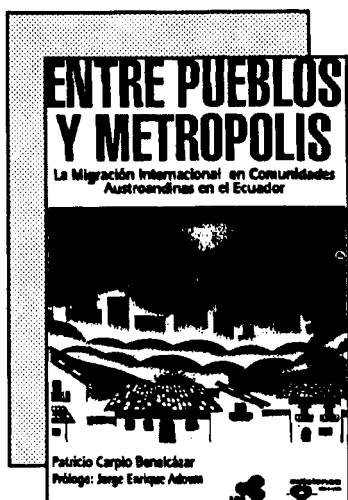
Cuestiones Economicas, No 19 (Nueva Serie) Mayo 1992

Banco Central del Ecuador

Este segundo número, en el marco de la nueva serie de la Revista, amerita un par de reflexiones. En primer lugar, se insiste en que la consolidación de publicación de excelencia académica exige el apoyo de los técnicos que laboran en el Banco Central del Ecuador, que tienen mucho que decir en el campo de la teoría y la práctica y pueden generar debates interesantes sobre asuntos transcendentales en la coyuntura por la que atraviesa Ecuador.



LIBROS



ENTRE PUEBLOS Y METROPOLIS

**LA MIGRACION INTERNACIONAL
EN COMUNIDADES AUSTR
ANDINAS EN EL ECUADOR.**

**PATRICIO CARPIO BENALCAZAR
PROLOGO: JORGE ENRIQUE ADOUM
ILDIS-ABYA-YALA**

Se ha vuelto casi tópicamente decir que Nueva York es la tercera ciudad ecuatoriana con cerca de 400.000 compatriotas. Pero no que tan alto número indica que un gran porcentaje de ecuatorianos han perdido la fe en su país, no

como lugar de origen, del que pueden sentirse orgullosos, sino como sitio donde poder vivir. En este sentido, la migración internacional no constituye una estrategia de sobre vivencia para familias sin recursos, sino una forma de continuidad social frente a la carencia de expectativas vitales.



PUEBLOS INDIOS, ESTADO Y DERECHO

CORPORACION EDITORA NACIONAL, ILDIS, CORPEA, ABYA-YALA Y TALLER CAUSANACUNCHIC

Este volumen de la colección "Ciencias Sociales" presenta los puntos de vista de diversos especialistas, que analizan la relación entre los Pueblos Indios y el Estado, a la vez que proponen alternativas sobre formas de autogestión y participación política que reconozcan la heterogeneidad socio-cultural del Ecuador.

Un contenido especialmente innovadores el tratamiento de la relación entre derecho positivo y valores y costumbres indígenas, tema en torno al cual casi no existe investigación en el país.

CAMPESINADO Y ENTORNO ECOSOCIAL

CESA

El libro presenta una versión re-editada, con significativos anexos del programa de reforestación y conservación de los recursos naturales en áreas deprimidas de la sierra ecuatoriana, desarrollado por la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA); con el apoyo de la Cooperación Técnica del Gobierno Suizo (COTESU).

Trae un detallado y exhaustivo diagnóstico de la situación de los recursos productivos, con énfasis en los forestales de las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Cañar y Guayas.

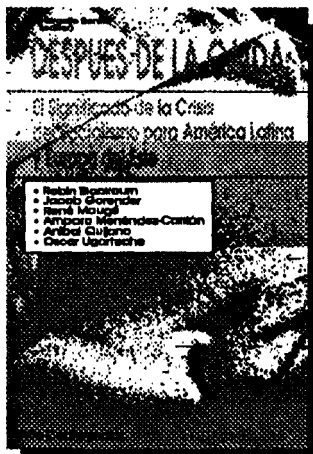


DESPUES DE LA CAIDA:

EL SIGNIFICADO DE LA CRISIS DEL SOCIALISMO PARA AMERICA LATINA Y EUROPA DEL ESTE

FLACSO - VARIOS AUTORES

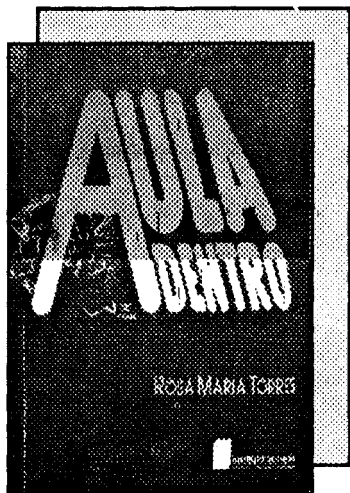
La sede Ecuador de FLACSO aprovechó la presencia en Quito, dentro del marco de un simposio internacional de Robin Blackburn, Jacob Gorender y Anibal Quijano a los que se sumaron Oscar Ugarteche, René Mauge y Amparo Menéndez-



Carrión, para invitarlos a debatir públicamente sobre la Crisis de Europa del este y sus consecuencias para América Latina.

Quedan en este volumen los bocetos y las puntas de una trama cuyo desarrollo debiera seguir examinándose, no sólo por los problemas que contiene para nosotros el

nuevo siglo, sino porque valores como justicia, solidaridad y equidad siguen siendo irrenunciables.

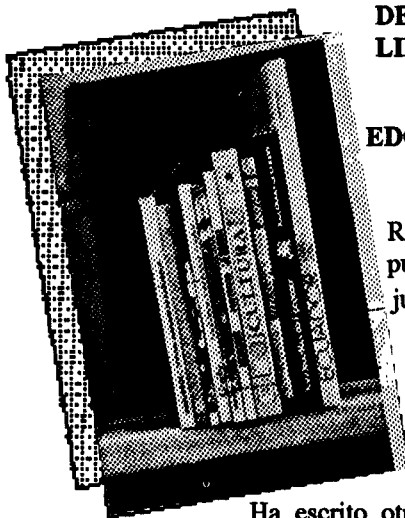


AULA ADENTRO

ROSA MARIA TORRES UNICEF-INSTITUTO FRONESIS

Este libro es un compendio de ciento cincuenta artículos periodísticos sobre el tema educativo, escritos entre 1988 y 1991. La autora nos lleva aula adentro por los mil vericuetos de una educación que, incluyendo a todos los niveles del sistema -desde la educación inicial hasta la universitaria-, -a todos, sus componentes desde cuestiones de política educativa hasta la práctica pedagógica en el aula- y a todos los sujetos involucrados en él -alumnos, maestros,

padresdefamilia, autoridadeseducacionales-, muestra inequívocamente la necesidad y la urgencia del cambio.



DESDE EL MOSTRADOR DEL LIBRERO

EDGAR FREIRE RUBIO

Recoge una extensa bibliografía de lo publicado en Ecuador desde junio de 1987 a julio de 1990.

El autor es Director de la Librería CIMA. Es uno de los mayores especialistas del libro ecuatoriano, escribe para la sección libros del Diario "El Comercio".

Ha escrito otros textos bibliográficos y compilaciones sobre tradiciones y leyendas de la ciudad de Quito.

LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA CRISIS ACADEMICA Y CONFLICTO POLITICO

LUCAS PACHECO PRADO
PROLOGO: JAVIER PONCE CEVALLOS
ILDIS

Hay temas sobre los cuales la sociedad a veces hecha tierra, a veces condena y anatemiza sin más.

Uno de estos temas, tal vez el que más ha sufrido el silencio y el vilipendio ha sido la Universidad Ecuatoriana. A tal punto, que la sociedad ha comenzado a prescindir de ella, con lo cual no ha hecho más que acomodar su cotidiana sobrevivencia al mimetismo, a la repetición de estilos de vida importados.

Nuestra sociedad ya no se interesa en la universidad, porque ya no se mira a sí misma, ya no se piensa, ya no se critica.

